

Trabajo Fin de Grado

La vulneración del derecho fundamental a la protección de datos personales en el artículo 58 bis de la LOREG. Análisis de la Sentencia del Tribunal Constitucional 76/2019

Autora

Ana Aguas Blasco

Directora

Eva Sáenz Royo

Facultad de Derecho
2020

ÍNDICE

LISTADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS.....	PÁGINA 3
I. INTRODUCCIÓN.....	PÁGINA 4
1. CUESTIÓN TRATADA EN EL TRABAJO FIN DE GRADO.....	PÁGINA 4
2. RAZÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN DE SU INTERÉS.....	PÁGINA 5
3. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO.....	PÁGINA 6
II. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.....	PÁGINA 7
1. CONCEPTO.....	PÁGINA 7
2. REGULACIÓN.....	PÁGINA 9
III. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 76/2019, DE 22 DE MAYO DE 2019.....	PÁGINA 11
1. ANTECEDENTES.....	PÁGINA 12
2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS.....	PÁGINA 18
IV. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA A PARTIR DE DIFERENTES CONSIDERACIONES DOCTRINALES.....	PÁGINA 24
V. CONCLUSIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL.....	PÁGINA 28
BIBLIOGRAFÍA.....	PÁGINA 32
JURISPRUDENCIA.....	PÁGINA 33
LEGISLACIÓN.....	PÁGINA 34

LISTADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

AEPD	Agencia Española de Protección de Datos
art./arts.	Artículo/artículos
CDFUE	Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
CE	Constitución Española
coord.	Coordinador
et. al.	Y otros
ex.	En virtud de
Ibíd.	Obra citada inmediatamente antes
LOPD	Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
LOPDGDD	Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
LOREG	Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
LORTAD	Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal
núm.	Número
p./pp.	Página/páginas
cit.	Obra citada
RGPD	Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional
TFUE	Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Vid.	Véase

I. INTRODUCCIÓN

1. CUESTIÓN TRATADA EN EL TRABAJO FIN DE GRADO

Los nuevos medios tecnológicos y, especialmente, el auge experimentado por las redes sociales en los últimos años han supuesto una revolución para la sociedad, pues ello ha transformado la manera en la que las personas se comunican, interactúan y ejercen su libertad de expresión y de información, además de potenciar todavía más los efectos de la globalización en estos ámbitos, ya que la gran red de Internet no conoce de fronteras, lo que permite mayor flujo de relaciones entre estados y ciudadanos y la conformación de percepciones globales¹.

De hecho, de acuerdo con el *Global Digital Report* (2018)², de los siete mil seiscientos millones de habitantes que hay en el mundo, cuatro mil millones, aproximadamente, son usuarios de Internet, lo que supone un 53% de la población total, y tres mil doscientos millones son usuarios activos de medios sociales, es decir, un 42% de la población. Datos que constatan la importancia que Internet y las redes sociales tienen en todas las esferas de nuestras vidas, que, además, no tendrán otra tendencia sino a aumentar todavía más y crear nuevos espacios.

Así, como no podía ser de otra manera, ese intercambio de opiniones, esos cambios en la comunicación y en la forma de informarse han alcanzado al debate político, que se ha trasladado a la red, y, con ello, los partidos políticos han visto la necesidad de adaptarse a esta transformación digital, modificando el modo convencional de hacer campaña, de llegar a los ciudadanos e, incluso, de captar sus votos.

Consecuentemente, ello ha desembocado en la necesidad de adecuar la normativa europea a los nuevos tiempos, lo que va acompañado de la correspondiente acomodación de las legislaciones de los Estados Miembros.

Fruto de ello se desarrollaron el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo

¹ EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION), *Joint Report of The Venice Commission and of the Directorate of Information Society and Action Against Crime of the Directorate General of Human Rights and Rule Of Law (DGI) on Digital Technologies and Elections*, Estrasburgo, 24 de junio de 2019 [Consultado 2 de junio de 2020]. Disponible en: [http://www.cepc.gob.es/docs/default-source/comisionveneciadoc/cdl-ad\(2019\)016-e.pdf?sfvrsn=0](http://www.cepc.gob.es/docs/default-source/comisionveneciadoc/cdl-ad(2019)016-e.pdf?sfvrsn=0)

² KEMPT, SIMON, *Global Digital Report* [We are social], 30 de enero de 2018 [Consultado 2 de junio de 2020]. Disponible en: <https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018>

que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en el marco europeo, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en el marco legislativo español, conllevando esta última la inclusión de un nuevo artículo 58 bis en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que permitía la recopilación por parte de los partidos políticos de opiniones expresadas por los ciudadanos en la web.

La incorporación de este nuevo artículo no quedó fuera de debates, controversias y escepticismos³, entendiéndose como un posible ataque al derecho fundamental de protección de datos personales, que llevó, finalmente, a la interposición de recurso de inconstitucionalidad por parte del Defensor del Pueblo.

En ello se centra este Trabajo Fin de Grado (TFG), que analiza la Sentencia del Tribunal Constitucional con la que culminó el proceso iniciado por el Defensor del Pueblo y aporta, también, una opinión al respecto fundada en las argumentaciones esgrimidas por la doctrina.

2. RAZÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN DE SU INTERÉS

La razón principal que me llevó a elegir este tema en concreto fue mi constante interés por el Derecho Constitucional en general, pero, sobre todo, por los Derechos Fundamentales.

Por otro lado, la expansión tecnológica en la que estamos inmersos desde hace algún tiempo también me despierta gran curiosidad e inquietud y, tanto en mi condición de estudiante de Derecho como en la de ciudadana, me resulta esencial conocer cómo se utilizan los datos que nosotros mismos depositamos en Internet –incluso, en ocasiones, sin darnos cuenta– para fines que ignoramos y cómo se deben proteger nuestros derechos correctamente para evitar situaciones totalmente indeseables.

Pienso, igualmente, que este interés se extiende a toda la ciudadanía, porque, hoy en día, no hay nada más cotidiano y rutinario que el uso de la red, así que es de vital importancia estar bien protegidos por el Derecho.

³ SÁNCHEZ, J. M., Cómo evitar que los partidos recopilen tus datos para mandarte «spam» político, en ABC, Madrid, 7 de diciembre de 2018 [Consultado 2 de junio de 2020]. Disponible en: https://www.abc.es/tecnologia/consultorio/abci-como-evitar-partidos-recopilen-datos-para-mandarte-spam-politico-201812071247_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F

3. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO

En este Trabajo se analiza la Sentencia del Tribunal Constitucional 76/2019 que resuelve el proceso iniciado por el Defensor del Pueblo contra el artículo 58 bis de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

La metodología seguida para su elaboración ha estado marcada por una búsqueda precisa de la jurisprudencia que acota el derecho fundamental a la protección de datos personales, para poder comprender el fondo de la cuestión, así como por una minuciosa lectura de la Sentencia objeto de estudio, en orden a poder conceptualizar correctamente sus antecedentes y fundamentos.

También he navegado por diferentes bases de datos con el objetivo de encontrar la doctrina que me proporcionara la base en la que apoyarme para estudiar la Sentencia y conformar mi propia opinión, adecuadamente fundada en las valoraciones de los expertos.

De este modo, este TFG se ha estructurado como sigue. En primer lugar, se delimita conceptualmente el derecho fundamental a la protección de datos personales que protege la Constitución Española, haciendo un recorrido por la jurisprudencia que lo enmarca y matiza, así como por la regulación que lo desarrolla.

A continuación, se analiza el contenido de la citada Sentencia 76/2019, sintetizando los antecedentes que motivaron la causa y la fundamentación jurídica desarrollada por el Tribunal Constitucional para dilucidar el conflicto y ponerle fin.

Después se analiza nuevamente la Sentencia, pero a través de las diferentes consideraciones doctrinales.

Por último, se establecen las conclusiones a las que lleva todo el trabajo previo y apporto mi valoración y opinión personal en relación a lo estudiado.

II. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

1. CONCEPTO

El derecho fundamental a la protección de datos personales encuentra su definición en el artículo 18.4 de la Constitución Española de 1978 (en adelante, CE), que establece: «La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos». El mencionado artículo está inserto en el Título Primero («De los derechos y deberes fundamentales»), Capítulo II («Derechos y libertades»), Sección 1ª («De los derechos fundamentales y de las libertades públicas») de la Constitución, y es por ello, precisamente, que se trata de un derecho fundamental. Así, se debe conectar este derecho –al igual que el resto de derechos fundamentales– con el artículo 53.1 CE, que establece el principio de reserva de ley y el necesario respeto al contenido esencial del derecho, garantías inquebrantables de esta categoría de derechos que la distinguen del resto de derechos que no son fundamentales.

El artículo 18.4 es el encargado de «dotar a las personas de la cobertura jurídica necesaria frente al peligro que supone la informática para la intimidad», lo cual se debe garantizar por Ley y para «[...] el pleno ejercicio de sus derechos», es decir, que también quedan bajo esta protección otros derechos y libertades⁴. No obstante, la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha ido perfilando en sus pronunciamientos el sentido y alcance del artículo 18.4 CE, interpretando, finalmente, que el derecho a la protección de los datos frente al uso de la informática es un derecho autónomo e independiente, como se desprende de la Sentencia del Tribunal Constitucional 254/1993, de 20 de julio de 1993, en su fundamento jurídico 6: «estamos ante un instituto de garantía de otros derechos, fundamentalmente el honor y la intimidad, pero también de un instituto que es, en sí mismo, un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos, lo que la

⁴ TEJERINA RODRÍGUEZ, O., *Protección de datos y seguridad de Estado* [Tesis Doctoral] Universidad Complutense de Madrid, Madrid (2012), p. 51 [Consultado 2 de abril de 2020]. Disponible en: <http://eprints.ucm.es/cuarzo.unizar.es:9090/30768/1/T36145.pdf>

Constitución llama “la informática”»⁵. Además, esta Sentencia también se encarga de aclarar que el derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona y las facultades de información relativas al conocimiento de existencia, fines y responsables de ficheros automatizados donde figuran datos personales de un ciudadano son fundamentales «para que los intereses protegidos por el art. 18 CE resulten real y efectivamente protegidos» y «forman parte del contenido del derecho a la intimidad, que vincula directamente a todos los poderes públicos, y ha de ser salvaguardado por este Tribunal, haya sido o no desarrollado legislativamente» (fundamento jurídico 7)⁶.

También la Sentencia del Tribunal Constitucional 290/2000, de 30 de noviembre de 2000, acota el derecho fundamental contenido en el artículo 18.4 CE estipulando que este garantiza a las personas poder de control y disposición sobre sus datos personales, incluyendo el derecho a consentir la recogida y uso de los datos, el derecho a ser informado sobre la posesión y finalidad de tales datos, así como el derecho a oponerse, siendo estos elementos esenciales para hacer efectivo el contenido del derecho (fundamento jurídico 7). Además, el fundamento jurídico 11 subraya claramente que el bien jurídico constitucionalmente relevante, protegido por el artículo, es «la protección de los datos de carácter personal frente a un tratamiento informático que pueda lesionar ciertos derechos fundamentales de los ciudadanos o afectar al pleno ejercicio de sus derechos»⁷.

Por último, y en la misma línea, la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre de 2000, que añade, además, que el objeto de protección del derecho fundamental a la protección de datos abarca cualquier tipo de dato de carácter personal cuyo conocimiento o uso por terceros pueda afectar a sus derechos, y no solo los datos relativos a la vida privada o íntima, es decir, «todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para

⁵ Sentencia del Tribunal Constitucional 254/1993, de 20 de julio de 1993 (BOE núm. 197, de 18 de agosto de 1993) [ECLI:ES:TC:1993:254].

⁶ STC 254/1993, *cit.*

⁷ Sentencia del Tribunal Constitucional 290/2000, de 30 de noviembre de 2000 (BOE núm. 4, de 04 de enero de 2001) [ECLI:ES:TC:2000:290].

cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo» (fundamento jurídico 6)⁸.

En conclusión, el artículo 18.4 CE contiene el derecho fundamental a la protección de datos personales que puedan crear un perfil de cualquier índole sobre la persona y, por ello, afectar a sus derechos, y se deben establecer siempre unas garantías adecuadas con respecto al poder de control, disposición y oposición de la persona sobre dichos datos para evitar que su uso invada la vida privada de la persona a través de su tratamiento informático.

2. REGULACIÓN

Una vez delimitado y explicado el concepto del derecho fundamental a la protección de datos personales, es interesante realizar un breve recorrido por su desarrollo normativo, puesto que no son pocas las referencias a este derecho tanto en el plano estatal como en el comunitario e internacional.

En primer lugar, la configuración del desarrollo del derecho se encuentra, conjuntamente, en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos⁹ (también conocido como Reglamento General de Protección de Datos, en adelante, RGPD), y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD), que sustituye a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), que a su vez derogó a la primera ley orgánica en esta materia, la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal (LORTAD).

⁸ Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre de 2000 (BOE núm. 4, de 04 de enero de 2001) [ECLI:ES:TC:2000:292].

⁹ Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DOUE L 119/1 de 4 de mayo de 2016).

Tal y como explica el Preámbulo de la LOPDGDD, el principio de seguridad jurídica obliga a que los Estados Miembros integren el ordenamiento europeo en sus propios ordenamientos jurídicos. Es por ello que el RGPD requirió la elaboración de la nueva ley orgánica¹⁰. En esta línea, escribe Martínez Vázquez que la norma europea fue, por tanto, el punto de partida de la LOPDGDD y constituye el complemento necesario del RGPD y destaca, además, la importancia de que la regulación de un derecho fundamental se dé en un Reglamento europeo. Asimismo, también deja constancia de que el Reglamento perseguía un doble objetivo: «evitar la fragmentación de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros en materia de protección de datos personales, especialmente en lo relativo al régimen sancionador, y conseguir la adaptación de la normativa protectora del derecho a un entorno tecnológico completamente diferente del que vio nacer las primeras regulaciones en la materia»¹¹.

En segundo lugar, este derecho también se encuentra recogido en dos de los documentos constituyentes de la Unión Europea: la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en adelante, CDFUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante, TFUE). Lo recogen, respectivamente, sus artículos 8¹² y 16¹³.

En tercer y último lugar, y especialmente por el interés que suscita para este trabajo, es conveniente mencionar dos documentos de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)¹⁴. El primero de ellos es la Circular 1/2019, de 7 de marzo, de la Agencia

¹⁰ Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE núm. 294, de 6 de diciembre de 2018).

¹¹ MARTÍNEZ VÁZQUEZ, F., «La tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales», en *Tratado de protección de datos*, Rallo Lombarte (coord.), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 53-78.

¹² Artículo 8 de la CDFUE: «Protección de datos de carácter personal. 1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan. 2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que le conciernan y a obtener su rectificación. 3. El respeto de estas normas estará sujeto al control de una autoridad independiente».

¹³ Artículo 16 del TFUE: «1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan. 2. El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las normas sobre protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos de carácter personal por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como por los Estados miembros en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, y sobre la libre circulación de estos datos. El respeto de dichas normas estará sometido al control de autoridades independientes. Las normas que se adopten en virtud del presente artículo se entenderán sin perjuicio de las normas específicas previstas en el artículo 39 del Tratado de la Unión Europea».

¹⁴ La Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad de protección de datos prevista por la LOPDGDD. Así, su artículo 44 establece que «es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, de las previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los

Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales relativos a opiniones políticas y envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería por parte de partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores al amparo del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General¹⁵, que da continuidad al segundo documento, el Informe Jurídico 210070/2018 del Gabinete Jurídico de la AEPD. La función que cumplen ambos es, básicamente, hacer una interpretación de las modificaciones que la disposición final tercera de la LOPDGDD introdujo en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG)¹⁶, especialmente por la introducción del nuevo artículo 58 bis, piedra angular en este trabajo.

III. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 76/2019, DE 22 DE MAYO DE 2019

La Sentencia del Tribunal Constitucional 76/2019, de 22 de mayo de 2019¹⁷ (en adelante, STC 76/2019), resuelve el proceso iniciado por el Defensor del Pueblo con la interposición del recurso de inconstitucionalidad número 1405-2019, presentado mediante escrito ante el Tribunal Constitucional el cinco de marzo de 2019, contra el apartado 1 del artículo 58 bis de la LOREG, incorporado a esta por el apartado dos de la disposición final tercera de la LOPDGDD.

Señala el artículo recurrido:

«Artículo cincuenta y ocho bis. Utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales.

1. La recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas.

poderes públicos en el ejercicio de sus funciones». A ella corresponde supervisar la aplicación de la LOPDGDD y del RGPD, así como ejercer las funciones que estos y otras leyes le asignan (art. 47 LOPDGDD).

¹⁵ Circular 1/2019, de 7 de marzo, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales relativos a opiniones políticas y envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería por parte de partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores al amparo del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (BOE núm. 60, de 11 de marzo de 2019).

¹⁶ Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (BOE núm. 147, de 20 de junio de 1985).

¹⁷ Sentencia del Tribunal Constitucional 76/2019, de 22 de mayo de 2019 (BOE núm. 151, de 25 de junio de 2019) [ECLI:ES:TC:2019:76].

2. Los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral.
3. El envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes no tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial.
4. Las actividades divulgativas anteriormente referidas identificarán de modo destacado su naturaleza electoral.
5. Se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición».

Este artículo se desarrolló e introdujo en la LOREG con el objetivo de regular y delimitar acciones que ya estaban sucediendo en la sociedad de la información y de la comunicación, pero que no contaban con el respaldo legal que debían, y para evitar la recogida de datos no autorizada¹⁸.

Según el artículo, se permite a los partidos políticos el tratamiento de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas mediante su recogida, encuadrada en las actividades que realicen, eso sí, siempre con las debidas garantías adecuadas.

Además, también se autoriza a los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales a que utilicen datos personales procedentes de páginas web y otras fuentes públicas para el desarrollo de sus actividades políticas durante el periodo electoral.

Por último, el artículo incluye en su apartado 3 la previsión de que el envío de propaganda electoral por medios electrónicos y equivalentes no es considerada como actividad o comunicación comercial, es decir, no queda sujeto a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

A continuación, se procede al análisis de la mencionada Sentencia que conoce de la constitucionalidad de este precepto. En primer lugar, se sintetizan los antecedentes que originan la causa. En segundo lugar, se analizan los fundamentos jurídicos manifestados por el Tribunal Constitucional para el esclarecimiento de la cuestión, que llevan, finalmente, al pronunciamiento del fallo.

1. ANTECEDENTES

En esta primera sección se presenta el supuesto de hecho causante de la STC 76/2019, todos los sucesos acaecidos, así como las posturas que adoptan las partes.

¹⁸ La propia enmienda de adición que introdujo el artículo recogió que su objeto era «establecer salvaguardas para impedir casos como el que vincula a Cambridge Analytica».

En primer lugar, como ya se ha dicho, el Defensor del Pueblo, mediante escrito presentado ante el Tribunal Constitucional el cinco de marzo de 2019, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el apartado 1 del art. 58 bis de la LOREG¹⁹, basándose en los siguientes motivos.

Primero, el Defensor del Pueblo considera que se está produciendo un ataque al contenido esencial del art. 18.4 CE, ex. artículo 53.1 CE²⁰, puesto que no se están precisando las garantías adecuadas que para este derecho fundamental debían haberse previsto. Es decir, a pesar de que el legislador establece en el apartado 1 del art. 58 bis de la LOREG «únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas», no está limitando de ninguna manera esa recopilación de datos personales relativos a opiniones políticas por parte de los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales que el artículo prevé. Hay un vacío en cuanto a la regulación del tratamiento de esos datos, así como en cuanto a las garantías en general, criterios para determinarlas, normas que deban regularlas y autoridad que deba establecerlas. Asimismo, tampoco hay referencia alguna a los derechos de los titulares, por lo que queda cuestionado el poder de disposición y control sobre los datos (lo cual forma parte del contenido esencial del derecho fundamental del art. 18.4 CE). Argumenta que se crea una situación de inseguridad jurídica contraria al artículo 9.3 CE²¹, que afecta también al derecho a la libertad ideológica del art. 16 y al derecho a la participación política del art. 23.1.

Segundo. El Defensor del Pueblo añade que lo dicho en el punto inmediatamente anterior es especialmente importante porque los datos relativos a las opiniones políticas pertenecen a la «categoría de datos especialmente protegidos». Ello queda recogido en el articulado de varios documentos legislativos, como es el caso del art. 6 del Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de

¹⁹ Artículo 58 bis LOREG: «Utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales. 1. La recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas [...]».

²⁰ Artículo 53.1 CE: «Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a)».

²¹ Artículo 9.3 CE: «La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos».

carácter personal, hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 1981²² y, en términos similares, el art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos²³.

En la misma línea, el art. 9.1 del RGPD incluye los datos personales relativos a las opiniones políticas en la categoría especial de este tipo de datos y, además, prohíbe su tratamiento, salvo en las excepciones del apartado siguiente, entre las que cabe destacar la dispuesta en el apartado g), que autoriza el tratamiento cuando «es necesario por razones de un interés público esencial».

La LOPDGDD matiza esta disposición en su artículo 9, estableciendo en el apartado 1 que «el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico». Sin embargo, bien es cierto que ello no impide que el tratamiento se autorice amparado en el resto de supuestos del art. 9.2 del RGPD.

Tercero. La adición del nuevo artículo 58 bis a la LOREG, introducido por la disposición final tercera de la LOPDGDD, rompe la línea normativa que protege de forma especial los datos relativos a las opiniones políticas permitiendo en su apartado 1 la recopilación de los mismos, amparado en tres conceptos inciertos e indeterminados: el «interés público» (que debería ser «interés público esencial»), las «garantías adecuadas» (que no se concretan) y las «actividades electorales» (que no aclara si se corresponden con el periodo de campaña electoral legalmente previsto en cada proceso).

Esta adición se fundamentó en el considerando 56 del RGPD²⁴, fundamentación que, además de no ser válida debido al carácter interpretativo y no normativo del

²² Artículo 6 del Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 1981 (BOE núm. 274, de 15 de noviembre de 1985): «Categorías particulares de datos. Los datos de carácter personal que revelen el origen racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas u otras convicciones, así como los datos de carácter personal relativos a la salud o a la vida sexual, no podrán tratarse automáticamente a menos que el derecho interno prevea garantías apropiadas. La misma norma regirá en el caso de datos de carácter personal referentes a condenas penales».

²³ Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: «Derecho al respeto a la vida privada y familiar 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás».

²⁴ Considerando (56) RGPD: «Si, en el marco de actividades electorales, el funcionamiento del sistema democrático exige en un Estado miembro que los partidos políticos recopilen datos personales sobre las

considerando, es errónea, puesto que este vincula el interés público al «funcionamiento del sistema democrático», y no a un interés público genérico, como queda patente en el art. 58 bis.

Así, sostiene el Defensor del Pueblo que tales indeterminaciones e inconcreciones implican una intromisión directa en el contenido esencial del derecho fundamental a la protección de datos personales, lo que –recuerda de nuevo– conlleva un ataque a los artículos 18.4 y 53.1 de la Constitución.

Cuarto. Simultáneamente, esa falta de concreción de las garantías que necesariamente deberían acompañar a la posibilidad de que los partidos políticos recopilen datos personales también implica una injerencia en la libertad ideológica que avala el art. 16 CE. Concluye el Defensor del Pueblo que el legislador ha eludido su deber de establecer correctamente tales garantías, más aún «siendo consciente del riesgo que las nuevas tecnologías y el tratamiento masivo de datos puede suponer para los derechos y libertades de las personas» (antecedente 1, apartado d).

Quinto. Asimismo, el Defensor del Pueblo valora que la elusión del establecimiento de los necesarios límites en el apartado 1 del art. 58 bis de la LOREG lleva a una nueva afectación indeseada en otro derecho protegido por nuestra Constitución, esta vez, el derecho a la participación política en asuntos públicos, amparado por el art. 23 CE. Argumenta que, en el contexto tecnológico actual, es posible afectar la voluntad de los electores, por lo que, en orden a proteger la libertad de sufragio, el legislador es requerido para actuar de forma positiva, cosa que no sucede.

Sexto, y último, el Defensor del Pueblo subraya, reiteradamente, la «total imprecisión» en los tres conceptos del apartado 1 del art. 58 bis, ya comentados en el argumento tercero, esto es, el «interés público», sin más precisiones, las «garantías adecuadas», que no se establecen, y las «actividades electorales», que no se acompañan de ningún marco limitador, especialmente, en cuanto al periodo concreto. Así, las dificultades de interpretación que acarreen estas ambigüedades derivan en una vulneración del principio de seguridad jurídica recogido en el artículo 9.3 de la CE, lo cual ya se anticipó en el primer argumento.

opiniones políticas de las personas, puede autorizarse el tratamiento de estos datos por razones de interés público, siempre que se ofrezcan garantías adecuadas».

En suma, añade que tampoco es posible conocer con exactitud quiénes son los sujetos legitimados para efectuar la recopilación de datos a la que autoriza el artículo, ya que este no especifica si también otros sujetos que actúan en el proceso electoral respaldados por la LOREG (federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores)²⁵ están asimismo autorizados. De igual manera, no queda establecido en el artículo si los datos recopilados pueden ser comunicados o transferidos a terceros o si, por el contrario, queda prohibido, ni tampoco se aclara de qué fuentes pueden ser obtenidos.

Por último, no se olvida de remarcar que, si todo ello ya supone dificultad para el operador jurídico, mayores dificultades tendrán que soportar los titulares de los datos, puesto que ni el artículo ni la normativa que lo acompaña fijan los poderes de disposición y control a los que deberían tener acceso.

El Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad el doce de marzo de 2019 y, consecuentemente, dio traslado de la demanda y los documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, para que, en el plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular alegaciones.

Así, el Abogado del Estado se personó en el proceso y, tras una prórroga de ocho días que le fue concedida, el diez de abril de 2019 presentó su escrito de alegaciones, en el que solicitó la desestimación íntegra del recurso, motivada en los argumentos siguientes.

En primer lugar, decide comenzar a responder la demanda por la última imputación de inconstitucionalidad que presentó el Defensor del Pueblo, esto es, la que concierne a la vulneración del principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE, a razón de que, de no producirse tal vulneración, el requisito de exigencia de las «garantías adecuadas» se vería cumplido y, por consiguiente, el resto de alegaciones aportadas por el Defensor del Pueblo decaerían.

Para ello acude a la Circular 1/2019, de 7 de marzo, de la AEPD, que entendió que las garantías adecuadas constan tanto en la literalidad del precepto impugnado, como en la

²⁵ El apartado 1 del artículo 44 de la LOREG reconoce que: «Pueden presentar candidatos o listas de candidatos: a) Los partidos y federaciones inscritos en el registro correspondiente. b) Las coaliciones constituidas según lo dispuesto en el apartado siguiente. c) Las agrupaciones de electores que reúnan los requisitos establecidos por las disposiciones especiales de la presente Ley».

motivación de la enmienda de incorporación del artículo –de la que se deduce que el soporte jurídico de los límites de la recopilación de datos es el considerando 56 del RGPD– y, de forma supletoria, en la LOPDGDD.

También en este documento se entiende –dice el Abogado del Estado– que el objetivo del precepto es «acabar con la desregulación previa de la recopilación por los partidos políticos de datos relativos a las opiniones políticas» y evitar la repetición de sucesos ya acaecidos en esta esfera. Además, las inconcreciones a las que refería el Defensor del Pueblo respecto de conceptos fundamentales del artículo no tienen cabida, pues el interés público está fundamentado en el mejor desarrollo de los procesos electorales, la recopilación de tales datos se limita al periodo electoral estricto y únicamente están habilitados los partidos políticos, y no ninguna otra organización.

Por todo ello, concluye que la afirmación de que el artículo no establece un mínimo de garantías adecuadas no es correcta.

En última instancia, tanto la mencionada Circular, como el Informe Jurídico 210070/2018 del Gabinete Jurídico de la AEPD que la precedió, aclaran que el precepto debe ser interpretado y aplicado en el ámbito del RGPD, de aplicación directa, y de la LOPDGDD, de aplicación supletoria, quedando así completo el establecimiento de las garantías adecuadas y siendo, por ello, totalmente constitucional la disposición impugnada.

Por último, el Abogado del Estado termina su razonamiento explicando que el resto de los argumentos aportados por el Defensor del Pueblo en su demanda decaen en virtud de las alegaciones expuestas anteriormente.

De esta manera, la impugnación de que se está produciendo un ataque al art. 18.4 CE en conexión con el art. 53.1 por la falta de precisión de las garantías adecuadas pierde su sentido al estar estas establecidas en el RGPD y la LOPDGDD.

Tampoco se vulnera la libertad ideológica del art. 16 CE, ya que no se está obligando a que las personas manifiesten su opinión política, ni el tratamiento de las mismas puede ser utilizado para fin distinto del que motivó su expresión.

Finalmente, bajo ningún concepto, apunta, hay vulneración del derecho a la participación política protegido por el art. 23 CE, ya que lo que persigue el precepto

impugnado es, justamente, el pluralismo político y el correcto funcionamiento del sistema democrático, lo que se consigue gracias a que la posibilidad de conocer las opiniones de los electores permite a los partidos políticos elaborar las estrategias electorales adecuadas.

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

En esta sección se analizan las argumentaciones jurídicas desarrolladas por el Tribunal Constitucional para el esclarecimiento de la cuestión.

En primer lugar, el Tribunal comienza por identificar el núcleo de la controversia, concluyendo que la impugnación central es la relativa al art. 18.4 CE en conexión con el 53.1, también de la Constitución, siendo las demás impugnaciones complementarias a esta. Esto es, las referidas a las infracciones del derecho a la libertad ideológica del art. 16 CE, del derecho a la participación política del art. 23 CE y del principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE.

Puesto que el apartado 1 del art. 58 bis de la LOREG no limita adecuadamente sus extremos relativos al interés genérico, las garantías adecuadas y las restricciones en el tratamiento de los datos personales, «el precepto impugnado habría incurrido en una doble y simultánea vulneración ex. art. 18.4 CE unida al 53.1 CE». Así, asume el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 2 de su Sentencia, objeto de este análisis, que el apartado 1 del art. 58 bis de la LOREG «constituye una injerencia en el derecho fundamental a la protección de datos personales garantizado por el art. 18.4 CE».

El Tribunal también se preocupa por delimitar el marco jurídico que regula el tratamiento de datos personales relativos a las opiniones políticas, conformado por dos disposiciones legales ya mencionadas en distintas ocasiones: el RGPD y la LOPDGDD.

Así, el considerando 10 del RGPD deja en manos de los Estados Miembros la especificación de sus normas, «inclusive para el tratamiento de categorías especiales de datos personales». Esto se traduce, en definitiva, en que los Estados Miembros tienen la obligación concreta de establecer, si se habilita el tratamiento de aquellos datos, el interés público esencial y la proporcionalidad del tratamiento al fin perseguido. Además, el considerando 56 dispone, con total claridad, que si se autoriza el tratamiento se deben ofrecer las garantías adecuadas.

Prosiguiendo, en el fundamento jurídico 5, el Tribunal expone la «doble singularidad» del artículo impugnado relativa, por un lado, a los sujetos habilitados, puesto que los partidos políticos son, como bien refleja el art. 6 CE²⁶, un instrumento fundamental para la participación política, y, por otro lado, al objeto de la habilitación, ya que los datos personales relativos a las opiniones políticas forman parte de una categoría de datos especialmente sensibles. Teniendo esto presente, continúa precisando los parámetros del contenido de la impugnación central, esto es, la vulneración del art. 18.4 CE en conexión con el art. 53.1 CE.

El contenido del derecho fundamental a la protección de datos del art. 18.4 CE comprende el poder de disposición y control sobre los datos personales, según el cual la persona puede decidir qué datos proporcionar o se pueden recabar y quién los posee y con qué finalidad, así como el derecho de oposición a tales actuaciones.

En suma, este derecho fundamental tiene una «doble perspectiva, como derecho fundamental autónomo dirigido a controlar el flujo de informaciones que concierne a cada persona, y como derecho fundamental instrumental ordenado a la protección del también derecho fundamental a la libertad ideológica» (fundamento jurídico 5, apartado b), es decir, la que consagra el art. 16 CE.

Por otro lado, el derecho a la protección de datos personales no tiene carácter absoluto, sino que puede ser restringido por ley, siempre y cuando tal restricción se deba al interés general y aquella establezca adecuada y proporcionalmente los límites.

Sobre estos límites cabe precisar que «las injerencias en derechos fundamentales deben responder a un fin constitucionalmente legítimo o encaminarse a la protección [...] de un bien constitucionalmente relevante», injerencia que está sometida a la reserva de ley²⁷.

A este respecto, las restricciones que las leyes hagan en los derechos fundamentales deben ser precisas y acompañadas de exigencias de previsibilidad y certeza, a fin de evitar indeterminaciones que terminen por socavar la garantía que la ley otorga a esos

²⁶ Artículo 6 CE: «Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos».

²⁷ Vid. fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Tribunal Constitucional 44/1999, de 22 de marzo de 1999 (BOE núm. 100, de 27 de abril de 1999) [ECLI:ES:TC:1999:44].

derechos. Consecuentemente, la falta de aquellas exigencias supone la vulneración del principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE, así como la lesión en el contenido esencial del derecho restringido.

A continuación, el fundamento jurídico 6 se dedica a precisar la naturaleza y el alcance del requisito constitucional de establecer las garantías adecuadas, tanto en el plano técnico como en el organizativo y procedimental, en orden de prevenir atentados al contenido esencial del derecho fundamental.

Para responder a la pregunta de por qué son necesarias las mencionadas garantías, el Tribunal Constitucional acude al fundamento jurídico 10 de su Sentencia 292/2000 –el cual ya fue invocado por el Defensor del Pueblo en sus alegaciones–. De él se concluye que las garantías adecuadas se necesitan para «fundamentar la validez constitucional de una regulación del tratamiento de datos personales» y para que los intereses que protege el derecho «resulten real, concreta y efectivamente protegidos». Asimismo, porque su falta supone una injerencia en el derecho fundamental y, en definitiva, porque se necesitan para garantizar el respeto a su contenido fundamental.

Esta misma línea es la que sostiene también la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declaró la invalidez de la Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE²⁸, ante la falta de precisión en el alcance de la injerencia en los derechos fundamentales de los arts. 7 y 8 de la CDFUE y de garantías suficientes en la protección de los datos.

A su vez, se recalca que los datos personales relativos a las opiniones políticas forman parte de la categoría de datos especialmente sensibles, por lo que exigen una especial protección, en definitiva, garantías apropiadas²⁹, lo cual reconoce, de igual modo, la AEPD en su Circular 1/2019.

²⁸ Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE (DOUE núm. 105, de 13 de abril de 2006).

²⁹ Vid. artículo 6 del Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, *cit.*

En definitiva, la especial condición de estos datos requiere de una protección superior, adecuada y específica, y así es reconocido tanto constitucional como comunitariamente.

Una vez llegado a este punto, el Tribunal dedica los fundamentos jurídicos 7 y 8 al enjuiciamiento de las tres tachas de inconstitucionalidad que reúne la impugnación central (las cuales se han ido tratando a lo largo de todo el análisis y se reproducen nuevamente a continuación con el único propósito de aportar claridad):

- i. La disposición legal impugnada no determina el interés público esencial que justificaría el tratamiento de datos personales que revelen opiniones políticas, haciendo únicamente mención al interés público.
- ii. No limita el tratamiento, pues no establece las restricciones al derecho fundamental de forma pormenorizada.
- iii. No establece las garantías adecuadas para proteger los derechos fundamentales afectados.

Con respecto a la primera tacha, ni la enmienda de adición del precepto ni tampoco el RGPD identifican ese interés público esencial que se requiere. Para responder a tal falta se invoca de nuevo la jurisprudencia que se estableció en la STC 292/2000, y que se traslada a este caso concreto, concluyendo que el interés público no puede ser genérico, siendo el legislador quien debe determinarlo y limitarlo explícitamente, por la competencia que le confiere el art. 53.1 CE.

Tampoco se acepta la justificación aportada por el Abogado del Estado, según la cual la finalidad perseguida, y por la que quedaría justificado el interés público esencial, es el mejor funcionamiento del sistema democrático, ya que también conlleva a una gran incertidumbre y continúa siendo imprecisa.

Finalmente, esa falta de precisión en la finalidad perseguida con el consentimiento del tratamiento de datos conlleva a que no se pueda determinar su carácter constitucionalmente legítimo.

En cuanto a la segunda tacha de inconstitucionalidad, el artículo impugnado deja, otra vez, cabos sueltos en cuanto a limitar y restringir se refiere, pues carece de restricciones sobre el alcance y contenido, disponiendo solamente que la recopilación de los datos se realizará «en el marco de sus actividades electorales», sin más concreciones.

Por último, la tercera tacha es la que alude a la falta de previsión de garantías adecuadas, que es la que más peso cobra de las tres que conforman la impugnación central.

Las posiciones enfrentadas del Defensor del Pueblo y del Abogado del Estado en lo que a esta cuestión respecta obligan al Tribunal a pronunciarse sobre si las garantías adecuadas en el uso de la informática deben establecerse en la propia ley que autorice ese uso o pueden estar contenidas en otra regulación.

En una primera aproximación, la respuesta que el Tribunal Constitucional da a la cuestión es que las garantías adecuadas deben establecerse en la misma ley que esté autorizando el tratamiento, bien directamente, bien remitiendo clara y expresamente a otras fuentes legales que las contengan, siempre que tengan el rango normativo adecuado, pues así lo exigen la reserva de ley y el respeto al contenido esencial del derecho que prevé el art. 53.1 CE.

Después, entrando más a fondo en la cuestión, el Tribunal entra a valorar la argumentación que aportaba en sus alegaciones el Abogado del Estado, que justificó que las garantías adecuadas se deducían por partida triple de la literalidad de la disposición impugnada, de su enmienda de adición y del marco normativo de la protección de datos personales, esto es, el RGPD y la LOPDGDD.

Sin embargo, el Tribunal no comparte la interpretación del Abogado del Estado, pues, en primer lugar, no es cierto que el apartado 1 del art. 58 bis de la LOREG especifique las garantías, sino que únicamente reconoce que deben establecerse.

En segundo lugar, incluso aunque las garantías adecuadas estuvieran previstas, efectivamente, en la enmienda de incorporación del artículo a la LOREG, tampoco bastaría, puesto que el contenido y la justificación de las enmiendas tienen valor interpretativo y no dispositivo legal. Pero es que, además, en la enmienda no aparecen precisiones en cuanto a contenido, naturaleza y extensión de las garantías adecuadas. Así las cosas, se rechaza también esta segunda vía defendida por el Abogado del Estado.

Por último, tampoco se acepta la tercera premisa que aporta el Abogado del Estado relativa a que las garantías se establecen en el desarrollo normativo del derecho fundamental, pues, para comenzar, de la redacción del artículo impugnado no se deduce ningún tipo de remisión, ni implícita, ni mucho menos explícita.

De todos modos, aunque así fuera, ello no sería compatible con la doctrina constitucional sobre la reserva de ley. Primero, porque se produciría una «deslegalización» al remitir a dos normas extensas sin precisar con exactitud dónde se disponen las garantías adecuadas y, más aún, porque ninguno de los dos textos las regula específicamente.

Segundo, la AEPD, que también desarrolla el contenido del derecho a la protección de datos, tiene funciones interpretativas y de aplicación de la normativa de derecho, básicamente, por lo que «no puede subsanar la insuficiencia constitucional de la que adolece el art. 58 bis LOREG», pues ello «vaciaría de contenido el principio de reserva legal que consagra la Constitución» (fundamento jurídico 8, apartado c).

En tercer lugar, la insuficiencia de la ley no se puede salvar mediante la técnica de la interpretación conforme, ya que a ella se recurre cuando del precepto pudieran desprenderse varias interpretaciones posibles y razonables todas ellas³⁰, cosa que no sucede en este caso.

En cuarto y último lugar, como ya se decía anteriormente, el RGPD solo establece las garantías mínimas para el tratamiento de datos personales y relega a los Estados Miembros la tarea de previsión y regulación concreta de las garantías adecuadas, también de las categorías especiales de datos, lo cual solo puede hacerse de forma expresa. Pero es que, en este caso, si se sigue el razonamiento del Abogado del Estado, sucedería que, además de no haber previsión expresa, la regulación del Estado Miembro redirige de nuevo al Reglamento, por lo que no se están cumpliendo los deberes normativos asignados por el RGPD.

Con todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional llega a la conclusión de que efectivamente se han producido tres vulneraciones del art. 18.4 CE en conexión con el art. 53.1 CE: no se ha identificado el interés público esencial que justificaría la injerencia en el derecho fundamental, ni se han precisado las condiciones de tal injerencia, ni tampoco se han establecido las garantías adecuadas. En definitiva, la disposición normativa es insuficiente.

³⁰ Vid. Sentencias del Tribunal Constitucional 168/2016, de 6 de octubre de 2016 (BOE núm. 276, de 15 de noviembre de 2016) [ECLI:ES:TC:2016:168], fundamento jurídico 4, apartado b, y 97/2018, de 19 de septiembre de 2018 (BOE núm. 247, de 12 de octubre de 2018) [ECLI:ES:TC:2018:97], fundamento jurídico 7.

Así, se estima por este motivo el recurso, considerando el Tribunal que resulta innecesario que se pronuncie sobre los demás motivos que se aportaban para la impugnación del precepto.

El Tribunal Constitucional falla a favor del Defensor del Pueblo, estimando el recurso de inconstitucionalidad y declarando contrario a la Constitución y nulo el apartado 1 del art. 58 bis de la LOREG, incorporado por el apartado dos de la disposición tercera de la LOPDGDD.

IV. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA A PARTIR DE DIFERENTES CONSIDERACIONES DOCTRINALES

La importancia y preocupación que suscita el hecho de que nuestra información personal pueda ser tratada por otras personas —o incluso por sistemas informáticos e inteligencia artificial—, y más cuando se trata de las opiniones políticas, supone que sea una cuestión ampliamente reflexionada y tratada por la doctrina. Por ello, se dedica este apartado a destacar los aspectos analizados por la doctrina que pueden resultar de interés para el análisis de la Sentencia objeto de este trabajo.

La transformación digital ha alcanzado a los procesos democráticos, tanto en la forma de participación ciudadana, como en la forma en que los candidatos llegan a los ciudadanos y captan sus votos. Tal y como señala la profesora Arenas Ramiro, parece lógico que los partidos políticos se adapten a los avances tecnológicos y cambien la forma en que se comunican con el electorado, creando nuevas formas de hacerlo que sean, en definitiva, más eficientes. Pero es diferente admitir su posible manipulación de la opinión pública. De ahí que «debemos asegurar la privacidad de los electores para garantizar el principio de igualdad de oportunidades en los procesos electorales»³¹.

Sin duda, la privacidad de los electores está en peligro desde el momento en el que el debate político se traslada a las redes sociales y los operadores disponen de gran cantidad de información de sus usuarios, que, a través de su procesamiento, puede llevar a predecir preferencias y dirigirse a ellos con publicidad personalizada, lo cual finalmente puede llegar a interferir en la decisión de voto. Pero otorgar esta información

³¹ ARENAS RAMIRO, M., «Partidos políticos, opiniones políticas e internet: la lesión del derecho a la protección de datos personales», en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 44, 2019, p. 344.

a los partidos políticos, limitándose aún más la privacidad de los ciudadanos, basándose en un interés público genérico y sin detallar todos los criterios de esa permisión de tratamiento de datos especialmente sensibles, parece avalar, a ojos de Arenas Ramiro, la decisión del Alto Tribunal³².

En el entorno *online* es complejo tanto identificar qué es una opinión política, y por tanto qué es un dato personal que puede ser recopilado, como distinguir el espacio público del privado. Por ello, desde mi punto de vista, el legislador debería haber especificado de qué fuentes podrían ser recogidos los datos, cumpliendo así con el principio de minimización de los datos que reconoce el art. 5.1.c) del RGPD, que queda evidentemente violado³³.

En estos términos, la concreción del concepto de opinión política también acarrea el incumplimiento del principio de minimización de los datos por la parte de que, debido a la gran cantidad de datos que se puede manejar en la red, podría llegar a recopilarse y tratarse un volumen de datos muy diverso³⁴.

Tampoco el apartado 1 del art. 58 bis de la LOREG concretó quién podía recoger los datos: solamente los partidos políticos o también federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores o, incluso, ser encargadas a terceros. Sí lo hizo la Circular 1/2019 de la AEPD, permitiendo que lo hicieran «partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que presenten las correspondientes candidaturas y resulten proclamadas conforme a los artículos 43 y siguientes de la LOREG». También señaló que el tratamiento podría encargarse a otro sujeto, pero que nunca podría ser comunicado o transferido a un tercero, lo cual, sin duda, es donde se producirían más conflictos³⁵.

Otra indeterminación que deriva del artículo impugnado es la relativa a cuándo se pueden recoger o utilizar los datos, pues únicamente establece que se producirá en el marco de las «actividades electorales», lo cual resulta demasiado amplio y genérico y

³² *Ibid.*, pp. 350-357.

³³ En este sentido, ARENAS RAMIRO, *cit.*, p. 359.

³⁴ GARCÍA SANZ, R. M., «Tratamiento de datos personales de las opiniones políticas en el marco electoral: todo en interés público», en *Revista de Estudios Políticos*, núm. 183, enero/marzo de 2019, pp. 129-159 [Consultado 18 de mayo de 2020]. Disponible en: <https://doi.org/10.18042/cepc/rep.183.05>

³⁵ Así lo valora, de nuevo, ARENAS RAMIRO, *cit.*, p. 361.

precisa de concreción, ya que el volumen de datos podría llegar a ser muy grande y vulnerar así, de nuevo, el principio de minimización de los datos³⁶.

Así, la justificación aportada por el Tribunal Constitucional en la STC 76/2019, que culmina con el fallo que declara inconstitucional el apartado 1 del artículo 58 bis de la LOREG, es, en mi opinión, acertada en cuanto a que efectivamente se producen tres vulneraciones relativas al art. 18.4 CE en conexión con el 53.1 CE: la inconcreción del interés público esencial, la falta de limitación pormenorizada del derecho fundamental y la ausencia de las garantías adecuadas³⁷.

Prueba de este acierto es, como subraya Enériz Olaechea, la unanimidad en el pronunciamiento de la cuestión de los magistrados del Tribunal Constitucional, pues ninguno se apartó de la fundamentación jurídica esgrimida formulando voto particular, lo que fortalece la justificación de que se había producido «una vulneración de la Constitución manifiesta, en el sentido de clara e indiscutible»³⁸.

De todos modos, aunque el mencionado apartado del precepto se ha declarado inconstitucional y, por tanto, no hay previsión jurídica concreta sobre la posibilidad por parte de los partidos políticos de recopilar datos relativos a las opiniones políticas, en la práctica sí se produce el tratamiento de datos personales y también el RGPD mantiene la posibilidad de hacerlo.

En la práctica, los partidos políticos podrían elaborar bases de datos para crear perfiles ideológicos de los ciudadanos gracias al elevado volumen de información personal que se puede encontrar *online*. Esta recopilación tendría gran impacto en la privacidad de las personas, y más si se tiene en cuenta el valor económico que podrían alcanzar, lo cual podría llegar a incentivar la creación de una especie de mercado que motivaría aún más

³⁶ *Ibíd.*, p. 361. La misma opinión mantiene GARCÍA SANZ, *cit.*, que explica que la permisión de esas actuaciones podría tener justificación si se posibilitasen únicamente durante el periodo de campaña electoral, pero que, sin embargo, ello perdería todo su fundamento legítimo si no se establecieran límites temporales y tal recogida y uso se permitiese de forma continuada, permanente o frecuentemente.

³⁷ Como bien explica PASCUA MATEO, F. A., «Un nuevo capítulo en la tutela del derecho a la protección de datos personales: los datos de contenido político. Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 76/2019, de 29 de mayo, en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1405-2019 (BOE núm. 151, 25 de junio de 2019)» en *Revista de las Cortes Generales*, núm. 106, primer semestre de 2019, pp. 556. En los mismos términos, SANZ PÉREZ, A. L., «La protección de datos personales y los partidos políticos» en *Revista Aranzadi Doctrinal*, núm. 8/2019.

³⁸ ENÉRIZ OLAECHEA, F. J., «Un comentario a la sentencia del tribunal constitucional que declara inconstitucional la recopilación por los partidos políticos de datos personales con opiniones políticas, obtenidos de las páginas web y de otras fuentes de acceso público» en *Revista Aranzadi Doctrinal*, núm. 9/2019.

la búsqueda de todos esos datos personales para conformarlas y venderlas, llevando a un intrusismo mayor o, incluso, a frustrar el voto secreto³⁹ o a vulnerar la libertad ideológica que protege el art. 16.2 CE⁴⁰.

Por ello, el «siguiente paso lógico» sería concretar las garantías adecuadas, más aun teniendo en cuenta que se está hablando de datos especialmente protegidos, lo que requeriría también de una protección reforzada, concretando y adaptando los principios que ya se venían aplicando de transparencia, finalidad determinada y minimización de los datos a los nuevos medios digitales⁴¹.

En adición, para la salvaguarda de todas las garantías que deberían establecerse, existen otros mecanismos legalmente previstos que podrían completar la protección del tratamiento de opiniones políticas por parte de los partidos políticos, que son los códigos de conducta. Su creación es una posibilidad prevista tanto en el RGPD como en la LOPDGDD, y podrían servir para marcar las reglas y los cánones éticos, además de conseguir potenciar la transparencia y respetar la esencia del derecho a la protección de datos, pues ello es esencial en todo proceso democrático⁴².

Sin duda, la forma en la que se reguló la cuestión a través del art. 58 bis de la LOREG no fue la más acertada, pues es una materia compleja que hubiera requerido mayor reflexión a la hora de legislar para detallar los conceptos fundamentales del artículo, que no pueden quedar indeterminados dada la importancia de la cuestión. No obstante, la intencionalidad subyacente era buena, ya que lo que se pretendía era evitar casos previos de recopilación ilícita de datos personales, así como dar respuesta a algo que en la práctica se produce sin regulación alguna⁴³.

Asimismo, el artículo también pretendía cumplir varias de las previsiones que contiene el art. 9.2.g) del RGPD, pero, de nuevo, como apunta Enériz Olaechea, su redacción

³⁹ En este sentido, GARCÍA MAHAMUT, R., «Partidos políticos y derecho a la protección de datos en campaña electoral: tensiones y conflictos en el ordenamiento español» en *UNED. Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 35, 2015, pp. 333-335.

⁴⁰ MARTÍNEZ MARTÍNEZ, R., «Partidos, algoritmos y campañas electorales», en *Revista Telos*, núm. 110, 10 de abril de 2019, p. 134.

⁴¹ ARENAS RAMIRO, *cit.*, pp. 364-364.

⁴² Así lo entiende, siguiendo la propuesta del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD), ARENAS RAMIRO, *cit.*, p. 368. En la misma línea, MARTÍNEZ MARTÍNEZ, R., «Partidos, algoritmos y campañas electorales», *cit.*, p. 135.

⁴³ Así, ARENAS RAMIRO, M., «Partidos políticos, opiniones políticas e internet: la lesión del derecho a la protección de datos personales», *cit.*, pp. 370-371. De igual manera opina PASCUA MATEO, F. A., «Un nuevo capítulo en la tutela del derecho a la protección de datos personales: los datos de contenido político...», *cit.*, p. 557.

terminó por ser «escasa, insuficiente e hipotética», incumpliendo las exigencias que contiene el artículo 9.2 del RGPD⁴⁴.

V. CONCLUSIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL

Con la entrada en vigor del RGPD, llegó la modificación de la Ley Orgánica de Protección de Datos (la LOPD) que hasta el momento regulaba en España el derecho fundamental a la protección de datos personales que garantiza el art. 18.4 CE, dando lugar a la vigente LOPDGDD. Ello supuso, por mandato de su disposición final tercera, apartado dos, la introducción de un nuevo artículo en la LOREG: el artículo 58 bis.

Su apartado 1 permitía, en una redacción que adolecía de importantes insuficiencias, la recogida por parte de los partidos políticos de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas. Tal previsión llenó de incertidumbre y preocupación a ciudadanos y expertos en la materia y generó controversia, lo que derivó en que fuera recurrido por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional.

Finalmente, el proceso culminó con la STC 76/2019, en cuyo fallo el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del apartado 1 del art. 58 bis de la LOREG ante la lesión que el mismo infería en el art. 18.4 de la CE en conexión con el art. 53.1, también de nuestra Constitución.

Tal lesión traía causa de tres vulneraciones concretas, como ya se ha constatado en diferentes ocasiones en este trabajo: la primera, el precepto no determinaba el interés público esencial al que debía sujetarse la permisión de la recopilación de los datos; la segunda, la imprecisión en las condiciones en que se limitaba el derecho; y la tercera, la inexistencia de las garantías adecuadas necesarias para garantizar la protección del derecho fundamental.

En fin, era una regulación repleta de carencias, más teniendo en cuenta tan importante asunto como es el de permitir que los partidos políticos recojan las opiniones políticas de las personas.

Así, teniendo en cuenta todo lo aportado, mi valoración de la STC 76/2019 es positiva y coincide con la argumentación y fallo esgrimidos por el Tribunal Constitucional, pues

⁴⁴ ENÉRIZ OLAECHEA, F. J., «Un comentario a la sentencia del tribunal constitucional...», *cit.*

toda la indeterminación, imprecisión e inconcreción que rodeaban al apartado 1 del artículo 58 bis de la LOREG, más que regular la cuestión, la desregulaba, y posibilitaba, incluso, actuaciones ilícitas, lo cual desembocaba en la lesión de derecho fundamental a la protección de datos personales que protege el art. 18.4 de la CE, en conexión con el art. 53.1 de la misma.

No obstante, la solución única no es declarar la inconstitucionalidad del precepto y dejar, de nuevo, la cuestión al descubierto y/o desprotegida, menos aun teniendo en cuenta que toda nuestra sociedad, nuestra forma de trabajar y de vivir, en general, está enormemente digitalizada –y cada vez más– y no parece posible eludir el uso de la red en todos los aspectos para los que hoy es prácticamente imprescindible.

Pero ello no quiere decir que se deba mirar para otro lado o permitir cualquier tipo de actuación amparada bajo la argumentación de que el uso de Internet ha cambiado la forma de comunicarnos, pues hay formas de recopilar y tratar la información más o menos intrusivas.

En ningún caso el uso de datos personales debe vulnerar el contenido esencial del derecho a la protección de datos, el cual –como ya asentó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional– se extiende a otros derechos relativos al honor, la ideología o la intimidad, así como a otros que permitan la identificación de la persona o la creación de su perfil ideológico, sexual, racial, económico o de cualquier otro ámbito, y, además, el afectado tiene derecho a consentir la recogida y uso de dichos datos y también a oponerse. Así, la falta de previsión legislativa puede generar conflictos, especialmente si no se cuenta con el consentimiento del sujeto afectado.

A partir de estas reflexiones, considero necesaria una regulación detallada y pormenorizada que contenga qué medios pueden ser utilizados, en qué términos y cuándo, tal y como la LOREG hace en relación a los medios tradicionales⁴⁵.

Ello, junto con el control y seguimiento de tales actuaciones, se hace, en mi opinión, fundamental. Por un lado, deben prevalecer los principios electorales y la igualdad de oportunidades en el acceso a la competición electoral, esto es, neutralidad política, transparencia e igualdad de armas. De otra parte, la falta de control podría suponer, no

⁴⁵ En este sentido, GARCÍA MAHAMUT, R., «Partidos políticos y derecho a la protección de datos en campaña electoral...», *cit.*, p. 324.

solo la transferencia de los datos recabados a terceros, sino también la proveniencia ilícita de los datos de terceros sujetos no autorizados. Además, si ello sucediera y los ciudadanos fueran conscientes de que sus datos circulan de unas manos a otras sin su consentimiento, finalmente acabarían por desconfiar de los partidos políticos, creándose una desconexión entre ambas partes fruto del sentimiento de ataque a su esfera privada⁴⁶.

En suma, los mencionados controles y medidas regulativas también son esenciales para evitar que los partidos orienten las opiniones electorales y con ello los resultados hacia una dirección concreta, como antes anticipaba, donde juegan un papel crucial las *fake news*, falsas cuentas en redes o falsos mensajes difundidos por algoritmos y sistemas de inteligencia artificial, manipulando y confundiendo⁴⁷.

En conclusión, y bajo mi punto de vista, los nuevos medios tecnológicos y las tecnologías de la información y de la comunicación, correctamente utilizadas, ofrecen muy buenas oportunidades, así como numerosos beneficios de diversa índole para la campaña electoral, a la que el casi inexistente éxito de los medios tradicionales la ha llevado a la obsolescencia.

De hecho, los nuevos medios de comunicación han impactado en las democracias de la Unión Europea de forma que el debate político, la propia campaña electoral y hasta la conformación de la opinión se han trasladado a los nuevos espacios que ofrece Internet, sustituyendo a aquellos medios convencionales⁴⁸. Y no solo eso, sino que la accesibilidad, eficacia y bajo coste de estos nuevos medios pueden contribuir al éxito de partidos antes desconocidos –de lo que hay evidencias constatadas–⁴⁹, fomentando el pluralismo político, siempre y cuando, remarco nuevamente, se usen de forma bienintencionada, lícita y transparente.

Por todo ello, sí se debe permitir que los medios electrónicos tomen parte importante en la campaña electoral, y que tanto partidos políticos como ciudadanos se aprovechen de sus ventajas, siendo un espacio de comunicación e intercambio de información limpio, apartándolo en todo momento de la manipulación, ya que los medios tradicionales de

⁴⁶ Suscribo así la opinión al respecto de GARCÍA MAHAMUT, *cit.*, p. 337.

⁴⁷ GARCÍA SANZ, «Tratamiento de datos personales de las opiniones políticas en el marco electoral ...», *cit.*, p. 137.

⁴⁸ *Ibid.*, pp. 136-137.

⁴⁹ Siguiendo a GARCÍA MAHAMUT, *cit.*, que así lo valora.

hacer campaña ya no son tan efectivos y se requiere una actualización a los nuevos tiempos.

En definitiva, aprovechar la tecnología y garantizar la función constitucional de hacer política y participar en ella y, en último término, el buen funcionamiento de la democracia. Eso sí, proporcionando siempre el sistema de garantías y control adecuado y pormenorizado, acotándolo a los determinados tiempos en los que se desarrolle la campaña electoral (con el objetivo de evitar así un posible intrusismo constante) y regulando detalladamente qué medios y condiciones, contando siempre con el consentimiento y conocimiento de los sujetos. La efectividad de dicha regulación exigiría también de un sistema de sanciones adecuado⁵⁰.

⁵⁰ En este sentido, ARENAS RAMIRO, M., «Partidos políticos, opiniones políticas e internet: la lesión del derecho a la protección de datos personales», *cit.*, pp. 369-370; también, SANZ PÉREZ, A. L., «La protección de datos personales y los partidos políticos», *cit.*

BIBLIOGRAFÍA

ARENAS RAMIRO, M., «Partidos políticos, opiniones políticas e internet: la lesión del derecho a la protección de datos personales», en *UNED. Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 44, 2019, pp. 341-372.

ENÉRIZ OLAECHEA, F. J., «Un comentario a la sentencia del tribunal constitucional que declara inconstitucional la recopilación por los partidos políticos de datos personales con opiniones políticas, obtenidos de las páginas web y de otras fuentes de acceso público» en *Revista Aranzadi Doctrinal*, núm. 9/2019.

EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION), *Joint Report of The Venice Commission and of the Directorate of Information Society and Action Against Crime of the Directorate General of Human Rights and Rule Of Law (DGI) on Digital Technologies and Elections*, Estrasburgo, 24 de junio de 2019 [Consultado 2 de junio de 2020]. Disponible en: [http://www.cepc.gob.es/docs/default-source/comisionveneciadoc/cdl-ad\(2019\)016-e.pdf?sfvrsn=0](http://www.cepc.gob.es/docs/default-source/comisionveneciadoc/cdl-ad(2019)016-e.pdf?sfvrsn=0)

GARCÍA MAHAMUT, R., «Partidos políticos y derecho a la protección de datos en campaña electoral: tensiones y conflictos en el ordenamiento español» en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 35, 2015, pp. 309-338.

GARCÍA SANZ, R. M., «Tratamiento de datos personales de las opiniones políticas en el marco electoral: todo en interés público», en *Revista de Estudios Políticos*, núm. 183, enero/marzo de 2019, pp. 129-159 [Consultado 18 de mayo de 2020]. Disponible en: <https://doi.org/10.18042/cepc/rep.183.05>

KEMPT, SIMON, *Global Digital Report* [We are social], 30 de enero de 2018 [Consultado 2 de junio de 2020]. Disponible en: <https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018>

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, R., «Partidos, algoritmos y campañas electorales», en *Revista Telos*, núm. 110, 10 de abril de 2019, pp. 130-135.

MARTÍNEZ VÁZQUEZ, F., «La tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales», en *Tratado de*

protección de datos, Rallo Lombarte (coord.), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 53-78.

PASCUA MATEO, F. A., «Un nuevo capítulo en la tutela del derecho a la protección de datos personales: los datos de contenido político. Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 76/2019, de 29 de mayo, en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1405-2019 (BOE núm. 151, 25 de junio de 2019)» en *Revista de las Cortes Generales*, núm. 106, primer semestre de 2019, pp. 549-558.

SÁNCHEZ, J. M., Cómo evitar que los partidos recopilen tus datos para mandarte «spam» político, en *ABC*, Madrid, 7 de diciembre de 2018 [Consultado 2 de junio de 2020]. Disponible en: https://www.abc.es/tecnologia/consultorio/abci-como-evitar-partidos-recopilen-datos-para-mandarte-spam-politico-201812071247_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F

SANZ PÉREZ, A. L., «La protección de datos personales y los partidos políticos» en *Revista Aranzadi Doctrinal*, núm. 8/2019.

TEJERINA RODRÍGUEZ, O., *Protección de datos y seguridad de Estado* [Tesis Doctoral] Universidad Complutense de Madrid, Madrid (2012), p. 51 [Consultado 2 de abril de 2020]. Disponible en: <http://eprints.ucm.es/cuarzo.unizar.es:9090/30768/1/T36145.pdf>

JURISPRUDENCIA

Sentencia del Tribunal Constitucional 254/1993, de 20 de julio de 1993 (BOE núm. 197, de 18 de agosto de 1993) [ECLI:ES:TC:1993:254].

Sentencia del Tribunal Constitucional 44/1999, de 22 de marzo de 1999 (BOE núm. 100, de 27 de abril de 1999) [ECLI:ES:TC:1999:44].

Sentencia del Tribunal Constitucional 290/2000, de 30 de noviembre de 2000 (BOE núm. 4, de 04 de enero de 2001) [ECLI:ES:TC:2000:290].

Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre de 2000 (BOE núm. 4, de 04 de enero de 2001) [ECLI:ES:TC:2000:292].

Sentencia del Tribunal Constitucional 168/2016, de 6 de octubre de 2016 (BOE núm. 276, de 15 de noviembre de 2016) [ECLI:ES:TC:2016:168].

Sentencia del Tribunal Constitucional 97/2018, de 19 de septiembre de 2018 (BOE núm. 247, de 12 de octubre de 2018) [ECLI:ES:TC:2018:97].

Sentencia del Tribunal Constitucional 76/2019, de 22 de mayo de 2019 (BOE núm. 151, de 25 de junio de 2019) [ECLI:ES:TC:2019:76].

LEGISLACIÓN

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Constitución Española (BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978).

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (BOE núm. 147, de 20 de junio de 1985).

Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 1981 (BOE núm. 274, de 15 de noviembre de 1985).

Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE (DOUE núm. 105, de 13 de abril de 2006).

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DOUE C 83/47 de 30 de marzo de 2010).

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DOUE L 119/1 de 4 de mayo de 2016).

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE núm. 294, de 6 de diciembre de 2018).

Circular 1/2019, de 7 de marzo, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales relativos a opiniones políticas y envío de propaganda

electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería por parte de partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores al amparo del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (BOE núm. 60, de 11 de marzo de 2019).